

Maastricht y todo eso

[Wynne Godley](#)

[Compartir en Twitter](#)

[Compartir en Facebook](#)[Correo electrónico](#)[Impresión](#)

1906 palabras

Muchas personas en toda Europa se han dado cuenta de repente de que no saben nada del Tratado de Maastricht, al tiempo que han sentido con razón que podría marcar una gran diferencia en sus vidas. Su legítima ansiedad ha provocado que Jacques Delors haya hecho una declaración en el sentido de que las opiniones de la gente común deberían ser consultadas en el futuro de forma más sensible. Podría haberlo pensado antes.

Aunque apoyo el avance hacia la integración política en Europa, creo que las propuestas de Maastricht tal como están en su forma son gravemente defectuosas, y también que el debate público sobre ellas ha sido curiosamente empobrecido. Con un rechazo danés, casi perdido en Francia, y la existencia misma del MTC en cuestión después de las depredaciones de los mercados de divisas, es un buen momento para hacer balance.

La idea central del Tratado de Maastricht es que los países de la CE avancen hacia una unión económica y monetaria, con una moneda única gestionada por un banco central independiente. Pero cómo se va a ejecutar el resto de la política económica? Como el tratado no propone más instituciones nuevas que un banco europeo, sus patrocinadores deben suponer que no se necesita nada más. Pero esto sólo podría ser correcto si las economías modernas fueran sistemas autoajustadores que no necesitaban ninguna gestión en absoluto.

Me dirijo a la conclusión de que tal opinión - que las economías son organismos autónomos que nunca bajo ninguna circunstancia necesitan gestión en absoluto - de hecho determinaron la forma en que se enmarcaba el Tratado de Maastricht. Es una versión burda y extrema de la opinión que desde hace algún tiempo ha constituido la sabiduría convencional de Europa (aunque no la de los EE.UU. o Japón) que los gobiernos son incapaces, y por lo tanto no deberían intentar, lograr ninguno de los objetivos tradicionales de la política económica, como el crecimiento y el pleno empleo. Todo lo que se puede hacer legítimamente, según esta opinión, es controlar la oferta monetaria y equilibrar el presupuesto. Se necesitó que un grupo compuesto en gran medida por banqueros (Comité Delors) llegara a la conclusión de que un banco central independiente era la única institución supranacional necesaria para dirigir una Europa integrada y supranacional.

Pero hay mucho más en todo. Hay que subrayar al principio que el establecimiento de una moneda única en la CE pondría fin de hecho a la soberanía de sus naciones componentes y a su poder de adoptar medidas independientes sobre cuestiones importantes. Como el señor Tim Congdon ha argumentado muy convincentemente, el poder de emitir su propio dinero, para hacer borradores en su propio banco central, es lo principal que define la independencia nacional. Si un país se rinde o pierde esta potencia, adquiere el estatus de una autoridad o colonia local. Evidentemente, las autoridades locales y las regiones no pueden devaluar. Pero también pierden el poder de financiar déficits a través de la creación de dinero, mientras que otros métodos de aumento de las finanzas están sujetos a una regulación central. Tampoco pueden cambiar las tasas de interés. Dado que las autoridades locales no poseen ninguno de los instrumentos de la política macroeconómica, su elección política se limita a asuntos relativamente menores de énfasis, un poco más de educación aquí, un poco menos de infraestructura allí. Creo que cuando Jacques Delors haga un nuevo hincapié en el principio de la subsidiariedad, realmente sólo nos dirá que se nos permitirá tomar decisiones sobre un mayor número de asuntos relativamente poco importantes de lo que podríamos haber supuesto anteriormente. Tal vez nos deje tener pepinos rizado después de todo. Gran cosa.

Permítame expresar una opinión diferente. Creo que el Gobierno central de cualquier Estado soberano debería esforzarse todo el tiempo para determinar el nivel general óptimo de la provisión pública, la carga global correcta de la tributación, la correcta asignación de los gastos totales entre las necesidades concurrentes y la distribución justa de la carga fiscal. También debe determinar en qué medida se financia cualquier diferencia entre el gasto y la fiscalidad mediante la elaboración de un proyecto sobre el banco central y cuánto se financia mediante préstamos y en qué condiciones. La forma en que los gobiernos deciden todos estos (y algunos otros) temas, y la calidad del liderazgo que pueden desplegar, determinará, en interacción con las decisiones de individuos, corporaciones y extranjeros, cosas como las tasas de interés, el tipo de cambio, la tasa de inflación, la tasa de crecimiento y la tasa de desempleo. También influirá profundamente en la distribución de los ingresos y la riqueza no sólo entre las personas, sino entre regiones enteras, sino también entre regiones enteras, así como las que se ven perjudicadas por los cambios estructurales.

Casi nada se puede decir nada del uso de estos instrumentos, con todas sus interdependencias, para promover el bienestar de una nación y protegerla así como de las conmociones de varios tipos a las que inevitablemente estará sometida. Sólo tiene un significado limitado, por ejemplo, decir que los presupuestos siempre deben equilibrarse cuando un presupuesto equilibrado con el gasto y la fiscalidad, tanto en el 40% del PIB, tendría un impacto totalmente diferente (y mucho más expansivo) que un presupuesto equilibrado en un 10%. Para imaginar la complejidad y la importancia de una decisión macroeconómica del gobierno, basta con preguntarse cuál sería la respuesta apropiada, en términos de política fiscal, monetaria y de tipo de cambio, para un país a punto de producir grandes cantidades de petróleo, de un aumento cuádruplo en el precio del petróleo. Hubiera sido correcto no hacer nada en absoluto? Y nunca debe olvidarse que en períodos de crisis muy grande, incluso puede ser apropiado que un gobierno central peque contra el Espíritu Santo de todos los bancos centrales e invocar el impuesto de inflación deliberadamente apropiarse de recursos reduciendo, a través de la inflación, el valor real de la riqueza de papel de una nación. Después de todo, fue por medio del impuesto a la inflación que Keynes propuso que paguemos por la guerra.

Recitaré todo esto para sugerir, no que la soberanía no se deba en la noble causa de la integración europea, sino que si todas estas funciones son renunciadas por gobiernos individuales simplemente tienen que ser a cargo de alguna otra autoridad. La increíble laguna en el programa de Maastricht es que, si bien contiene un plan para el establecimiento y el modus operandi de un banco central independiente, no hay ningún modelo que sea lo que sea del análogo, en términos comunitarios, de un gobierno central. Sin embargo, simplemente tendría que haber un sistema de instituciones que cumpla todas aquellas funciones a nivel comunitario que actualmente ejercen los gobiernos centrales de los distintos países miembros.

La contrapartida de renunciar a la soberanía debe ser que las naciones componentes se constituyan en una federación a la que se confía su soberanía. Y el sistema federal, o gobierno, como mejor se le llama, tendría que ejercer todas esas funciones en relación con sus miembros y con el mundo exterior que he esbozado brevemente anteriormente.

Considere dos ejemplos importantes de lo que un gobierno federal, a cargo de un presupuesto federal, debería estar haciendo.

Los países europeos se encuentran actualmente encerrados en una severa recesión. Tal y como están las cosas, sobre todo porque las economías de los EE.UU. y Japón también están flaqueando, no está muy claro cuándo se llevará a cabo una recuperación significativa. Las implicaciones políticas de esto se están volviendo aterradoras. Sin embargo, la interdependencia de las economías europeas ya es tan grande que ningún país, con la excepción teórica de Alemania, se siente capaz de aplicar políticas expansivas por sí solo, porque cualquier país que intentara expandirse por sí solo pronto encontraría una restricción de la balanza de pagos. La situación actual está gritando en voz alta por una reflación coordinada, pero no existen ni las instituciones ni un marco de pensamiento acordado que produzca este resultado obviamente deseable. Debería reconocerse francamente que si la depresión realmente diera un giro serio para peor, por ejemplo, si la tasa de desempleo volviera permanentemente al 20-25 por ciento característico de los Trece, los países individuales tardarían o temprano en que declaraban todo el movimiento hacia la integración y recurrir a los controles de cambio y la protección, si se quiere. Esto equivaría a una nueva ejecución del período de entreguerras.

Si hubiera una unión económica y monetaria, en la que se hubiera abolido realmente el poder de actuar de forma independiente, la reflación coordinada del tipo que se necesita tanto ahora sólo podría ser emprendida por un gobierno federal europeo. Sin una institución de este tipo, la UEM impediría una acción eficaz por parte de los distintos países y no pondría nada en su lugar.

Otro papel importante que cualquier gobierno central debe desempeñar es poner una red de seguridad bajo los medios de vida de las regiones componentes que están en peligro por razones estructurales debido al declive de alguna industria, digamos, o debido a algún cambio demográfico económicamente adverso. En la actualidad esto ocurre en el curso natural de los acontecimientos, sin que nadie se dé cuenta realmente, porque las normas comunes de la provisión pública (por ejemplo, la salud, la educación, las pensiones y las tasas de subsidio de desempleo) y una carga común (es de esperar, progresiva) se instituyen generalmente a través de los reinos individuales. Como consecuencia, si una región sufre un grado inusual de declive estructural, el sistema fiscal genera automáticamente transferencias netas a favor de él. *In extremis*, una región que no podía producir nada en absoluto no moriría de hambre porque estaría recibiendo pensiones, subsidio de desempleo y los ingresos de los servidores públicos.

Qué sucede si un país entero, una región potencial en una comunidad plenamente integrada, sufre un revés estructural? Mientras sea un Estado soberano, puede devaluar su moneda. A continuación, puede comerciar con éxito con pleno empleo siempre que su gente acepte el recorte necesario en sus ingresos reales. Con una unión económica y monetaria, este recurso está obviamente prohibido, y su perspectiva es grave a menos que se hagan arreglos de presupuestación federal que cumplan un papel redistributivo. Como se reconoció claramente en el Informe MacDougall, publicado en 1977, tiene que haber un *quid pro quo* para renunciar a la opción de devaluación en forma de redistribución fiscal. Algunos escritores (como Samuel Brittan y Sir Douglas Hague) han sugerido seriamente que la UEM, al abolir el problema de la balanza de pagos en su forma actual, aboliría el problema, cuando exista, de la persistente falta de competencia exitosa en los mercados mundiales. Pero como señaló el profesor Martin Feldstein en un importante artículo en *The Economist* (13 de junio), este argumento está muy peligrosamente equivocado. Si un país o región no tiene poder para devaluar, y si no es el beneficiario de un sistema de equiparación fiscal, entonces no hay nada que le impida sufrir un proceso de declive acumulativo y terminal que lleve, al final, a la emigración como única alternativa a la pobreza o al hambre. Simpatiza con la posición de aquellos (como Margaret Thatcher) que, ante la pérdida de soberanía, desean bajar por completo del tren de la UEM. También simpatiza con aquellos que buscan la integración bajo la jurisdicción de algún tipo de constitución federal con un presupuesto federal mucho más grande que el del presupuesto comunitario. Lo que me parece totalmente desconcertante es la posición de aquellos que aspiran a la unión económica y monetaria sin la creación de nuevas instituciones políticas (aparte de un nuevo banco central), y que levantan sus manos horrorizados por las palabras "federalismo" o federal. Esta es la posición adoptada actualmente por el Gobierno y por la mayoría de los que participan en el debate público.